



**EL PROCESO DE CODIFICACIÓN EN HONDURAS (1825-1880):
DEL DERECHO ESPAÑOL AL DERECHO NACIONAL**
DOI: <https://doi.org/10.5377/lrd.v46i1.21573>

José Manuel Cardona Amaya¹
ORCID: 0000-0003-4870-5619

RESUMEN:

En el año 2025 se conmemoran dos siglos del mandato constitucional que encomendó al primer Congreso Constituyente de Honduras la formación de los códigos civil y penal. A partir de esta efeméride, el presente artículo examina el proceso de codificación jurídica en Honduras entre 1825 y 1880, periodo en el cual el país intentó sustituir el derecho español heredado de la monarquía por una legislación nacional de carácter republicano. Aunque la codificación fue una promesa temprana de la independencia, diversos factores —guerras civiles, inestabilidad institucional, debilidad administrativa y conflictos internacionales— retrasaron su cumplimiento. Fue hasta la Reforma Liberal, bajo el gobierno de Marco Aurelio Soto, que se logró promulgar los primeros códigos nacionales. El estudio reconstruye los principales esfuerzos legislativos del siglo XIX, analiza la elección del modelo chileno como referente jurídico y discute el impacto simbólico, político y normativo de la entrada en vigor de los códigos en 1880. A través de una metodología histórica pragmática, se concluye que la codificación representó un hito fundacional del Estado liberal en Honduras.

PALABRAS CLAVE:

Codificación jurídica, Derecho español, Legislación nacional, Siglo XIX, Honduras, Bicentenario.

Fecha de recepción: 06/06/2025
Fecha de aprobación: 07/11/2025

¹ Máster en Historia Social y Cultural, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Correo Electrónico: jmcardona@unah.edu.hn

THE CODIFICATION OF LAW IN HONDURAS (1825–1880):
FROM SPANISH LEGAL TRADITION TO NATIONAL LEGISLATION
DOI: <https://doi.org/10.5377/lrd.v46i1.21573>

José Manuel Cardona Amaya²
ORCID: 0000-0003-4870-5619

ABSTRACT:

In 2025, Honduras commemorates 200 years since its first Constituent Congress mandated the drafting of civil and criminal codes. Taking this bicentennial as a starting point, this article examines the country's legal codification process between 1825 and 1880—a period marked by repeated attempts to replace Spanish monarchical law with republican national legislation. Although codification was an early goal of independence, it was delayed by civil wars, institutional instability, weak administration, and international tensions. Only during the Liberal Reform, under President Marco Aurelio Soto, were the first national codes enacted. This study reconstructs the key legislative efforts of the 19th century, analyzes the selection of the Chilean model as a legal reference, and discusses the symbolic, political, and normative impact of the 1880 codification. Using a pragmatic historical methodology, the article argues that the enactment of the codes was a foundational milestone in the formation of the Honduran liberal state.

KEYWORDS:

Legal codification, Spanish law, National legislation, 19th century, Honduras, Bicentennial.

Reception date: 06/06/2025
Approval date: 11/07/2025

² Master's degree in Social and Cultural History, lecturer in the Department of History, Faculty of Social Sciences. Email: jmcardona@unah.edu.hn

1. INTRODUCCIÓN

El 6 de junio de 1825, el primer Congreso Constituyente de Honduras estableció como atribución de la Asamblea Ordinaria la formación de los códigos civil y penal. A doscientos años de ese mandato fundacional, el presente artículo examina el proceso mediante el cual el país intentó, durante más de cinco décadas, sustituir las leyes españolas heredadas de la Colonia por una legislación republicana propia.

La codificación de las leyes fue una promesa temprana de la independencia centroamericana, pero su cumplimiento en Honduras se vio obstaculizado por guerras civiles, inestabilidad política y precariedad institucional. Fue hasta 1880, que el gobierno de Marco Aurelio Soto logró promulgar los primeros códigos nacionales.

Aunque los estudiosos de la historia hondureña han prestado atención a la Reforma Liberal del siglo XIX, los estudios específicos sobre la codificación jurídica son inexistentes. Este artículo se propone contribuir a llenar ese vacío mediante un análisis detallado de los intentos legislativos, los modelos jurídicos considerados y las condiciones que hicieron posible, finalmente, la promulgación de los códigos. Para ello, se reconstruye el proceso histórico desde 1825 hasta 1880, combinando fuentes legislativas, prensa de la época y documentos oficiales.

Desde una perspectiva metodológica, el estudio se adscribe a la historia pragmática propuesta por Jerzy Topolski, articulando la descripción factual con la interpretación causal, y apoyándose tanto en fuentes primarias del siglo XIX como en bibliografía especializada. A través de esta aproximación se busca mostrar cómo la codificación jurídica no fue un simple ejercicio técnico, sino una herramienta de afirmación

estatal, de proyección ideológica y de ruptura simbólica con el orden monárquico.

El objetivo es doble: por un lado, ofrecer una cronología rigurosa del proyecto codificador hondureño; por otro, interpretar las razones de su retraso, la elección del modelo chileno y el impacto que tuvo su implementación. Así, se propone no solo una historia jurídica, sino también una reflexión sobre los límites y posibilidades del Estado liberal en formación.

II. METODOLOGÍA

Este estudio se enmarca dentro de la metodología pragmática de la historia, según la sistematización propuesta por Jerzy Topolski (1992), quien distingue nueve momentos fundamentales en la investigación histórica: 1) la elección del campo de investigación; 2) el planteamiento del problema; 3) la selección de fuentes; 4) la crítica interna y externa de dichas fuentes; 5) la descripción de los hechos históricos; 6) la explicación de las causalidades que los vinculan; 7) la elaboración de sus implicaciones teóricas; 8) la formulación sintética de los resultados; y 9) la valoración crítica de los actores históricos y los procesos analizados.

El campo de investigación escogido es el proceso de codificación jurídica en Honduras durante el siglo XIX, con énfasis en los intentos por sustituir el derecho castellano por códigos nacionales. El problema histórico se centra en comprender las razones del retraso en la promulgación de los códigos, la elección del modelo chileno como referencia legislativa y las consecuencias de la entrada en vigor de esta nueva legislación en 1880.

Las fuentes consultadas provienen tanto de la bibliografía especializada como de documentos

primarios: gacetas, constituciones, leyes, decretos y acuerdos emitidos entre 1825 y 1880. Estas fuentes han sido sometidas a crítica interna y externa para determinar su autenticidad, su contexto de producción y su fiabilidad como testimonios del proceso de construcción jurídica hondureña.

III. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El tema de la historia de la codificación no ha sido abordado, directamente, en los estudios hondureños. Vicariamente, el asunto se ha tratado en libros de historia del derecho hondureño y, sobre todo, en textos de historia constitucional, sin embargo, siempre ha sido un problema secundario al de la evolución de la Carta Magna hondureña (Sáenz, 2015; Rojas, 2008). La efeméride de la promulgación de los códigos en 1880 es ampliamente conocida, pero ningún escrito ha descrito el proceso histórico que condujo a este acto y se han contentado con la explicación que la puesta en vigencia de las leyes patrias se debió a la superlativa administración de Marco Aurelio Soto, sin considerar los múltiples intentos de gobiernos anteriores.

En la región centroamericana la cuestión ha sido abordada desde distintas perspectivas. En Guatemala, la historia de la codificación se ha tratado dentro del marco de la lucha entre conservadores y liberales iniciada con la independencia de 1821. Muñoz (2003) explica que, tras el fracaso de aplicación de los Códigos de Livingston por el gobierno federal, el régimen de Rafael Carrera adaptó las leyes españolas antiguas a Guatemala, y fue hasta la revolución liberal de 1871 y su consolidación bajo Justo Rufino Barrios que esa nación inició su proceso de codificación. En El Salvador el proceso de codificación fue temprano: en 1826 se promulgó el Código Penal basado en el código español de 1822, que fue reemplazado en 1859 por el

presidente liberal Gerardo Barrios y luego en 1881 por Rafael Zaldívar (Silva, 1977). Esta ventaja temporal salvadoreña se explica porque el resto de los países centroamericanos se involucraron de manera temprana y directa en la guerra civil de la Federación en 1826, mientras que en El Salvador la Asamblea Ordinaria tuvo el tiempo para trabajar en el código antes de que el conflicto bélico trastornara el orden. Nicaragua expidió su primer Código Civil en 1866 que, al igual que los códigos hondureños de 1880, es considerado parte del impulso codificador inspirado por los códigos chilenos redactados por Andrés Bello en la década de 1850 (Soriano, 2013). El proceso costarricense inició con el Decreto de Bases y Garantías del jefe de Estado Braulio Carillo en 1841, que fue derogado por Francisco Morazán en 1842 y, sin embargo, permaneció una legislación influyente hasta llegar a permear el proceso de codificación definitivo conducido en 1880 (Hernández y Umaña, 2017).

En el marco latinoamericano, el proceso de codificación de Chile ha generado un interés general, por su influencia en la legislación de otros países (Bravo, 1982). El Código Civil chileno de 1855, redactado por Andrés Bello fue adoptado con algunas modificaciones en Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Panamá y Honduras; y sirvió como base de los códigos civiles de Paragua, Brasil y Argentina (Bravo, 1982). La obra de Bello fue un trabajo profundamente erudito: se trató de conciliar las antiguas leyes castellanas, con los ideales napoleónicos de inicios del siglo XIX y con el republicanismo americano posterior a la independencia. Las naciones latinoamericanas vieron en el Código de Bello un modelo que suplía sus necesidades jurídicas: lo suficientemente castellano para no trastornar la tradición heredada, lo suficiente republicano para aplicarse en aparatos jurídicos modernos.

Así, la codificación en Honduras debe comprenderse no como un acto aislado ni meramente administrativo, sino como parte de una constelación de esfuerzos jurídicos en el siglo XIX que respondieron a imperativos de modernización estatal, orden republicano y legitimación política. El estudio de este proceso, desde su especificidad nacional, permite enriquecer la comprensión histórica de los modelos jurídicos postcoloniales sin necesidad de agotar el panorama comparativo regional.

IV. RESULTADOS

Los esfuerzos por sustituir las leyes españolas por códigos nacionales en Honduras son tempranos y se remontan al primer Congreso Constituyente de la nación. Este cuerpo de diputados consignó en el artículo 32 de la Constitución del Estado de 1825 que era una atribución de la Asamblea Ordinaria del Estado formar los códigos civil y penal. Previamente, la Ley de Alcaldes Auxiliares, que regulaba el procedimiento de captura de los criminales, había anunciado que las disposiciones penales serían pronto sustituidas por los futuros códigos (Cardona, 2023).

En 1826 se reunió el Poder Legislativo en el primer Congreso Ordinario de Honduras. Aunque la Constitución les asignaba la tarea de redactar los códigos, las disputas políticas al interior de la Asamblea provocaron que este asunto quedara relegado a segundo plano. El Congreso desconoció la autoridad del jefe de Estado Dionisio de Herrera y mocionó para que se hicieran nuevas elecciones; Herrera se negó a aceptar esta resolución. El gobernador eclesiástico José Nicolás Irujo declaró la guerra al jefe de Estado, el Congreso se disolvió en la conmoción y a inicios del año siguiente de 1827, Honduras fue invadida por tropas federales que comandaba Justo José Milla: había comenzado la guerra

centroamericana que terminaría con el triunfo de Morazán en Guatemala en 1829 y los códigos habían quedado sin redactarse (Vallejo, 1882).

El Poder Legislativo se reunió en 1828 y 1829 sin atender el asunto de los códigos. El Congreso de 1830 tomó la decisión de ordenar la redacción de los códigos y dejar su aprobación a la legislatura siguiente. La misión fue encomendada al diputado Santos Bardales y se le dio tres meses contados desde finales del mes de mayo, por lo que para agosto Honduras ya debía contar con sus propios códigos (La Redacción, 1830). El diputado Bardales no completó la misión, aunque no se ha encontrado justificación en las fuentes, es posible que las amenazas de guerra enfrentadas en la segunda mitad de aquel año hayan prevenido la conclusión del proyecto, a lo que se suma que en 1831 y 1832 toda la República de Centroamérica se sumió en un nuevo conflicto bélico.

Paralelamente a los esfuerzos nacionales, el gobierno de la República Federal intentó introducir los Códigos penales de Livingston en Centroamérica desde 1831. Se trataba de una obra reciente, escrita por Edward Livingston para Luisiana en los Estados Unidos y que, para aquella época, ya gozaba de una reputación de legislación liberal de avanzada, apegada a los principios de las leyes napoleónicas y fiel a los valores de la revolución francesa. La obra consistía en 5 tomos y el Poder Ejecutivo de la Federación se vio en la obligación de traducirlos para que pudieran ser aplicados. La tarea recayó sobre el reconocido político José Barrundia. Según el presidente Francisco Morazán, el plan era aplicarlos primero en Guatemala y cuando se terminara la traducción, diseminarlos al resto de los Estados, para que estos los adoptaran sin cambios o los utilizaran como base para sus propios códigos, así, aunque no se aceptaran íntegramente, las parcialidades centroamericanas tendrían un

derecho sostenido por una base común. En 1836, Barrundia terminó la traducción y los Códigos de Livingston comenzaron a regir en Guatemala. El rechazo fue inmediato y fue utilizado por los enemigos de la unión centroamericana como un alegato más para combatir a Morazán (Muñoz, 2003). Entre los años de 1838 y 1842 se suscitaron los conflictos bélicos de la disolución de la Federación, que significó, también, el fin de la idea de aplicar los Códigos de Livingston en Centroamérica.

Los gobiernos hondureños inmediatamente posteriores a la disolución de la Federación no se ocuparon del asunto de la codificación. La razón yace en varios factores: las constantes guerras con los vecinos centroamericanos, las revueltas internas, las amenazas del Imperio Británico por usurpar territorio hondureño y la inestabilidad política de cada gobierno. Fue hasta el gobierno de José Santos Guardiola que se retomó el asunto. La Cámara de Representantes de 1859 expidió un decreto que facultaba al Poder Ejecutivo para formar una comisión compuesta por tres abogados que debían de redactar los códigos: civil, penal y de procedimientos (Matute, Fernández y Córdón, 1859). Esta comisión no se formó.

Ante la inacción del Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes de 1860 expidió un decreto en que solicitaba al gobierno mandar a traer a El Salvador los códigos de aquel país, para que estos fueran analizados por una comisión de diputados y adaptados a la situación hondureña (Martínez, Fernández y Tijerino, 1860a). Mientras tanto, y para suplir la falta de un código de comercio, el Poder Legislativo decretó que en Honduras regirían las Ordenanzas de Bilbao, una ley emitida en 1737 por el rey Felipe V (Martínez, Fernández y Tijerino, 1860b). El 14 de mayo, el gobierno hondureño recibió el Código Civil de El Salvador de parte de un agente diplomático.

Llegado el año de 1861, el trabajo en los códigos nacionales no había avanzado. Ese año, la Corte Suprema brindó una sentencia que causó revuelo en la sociedad, porque contravenía las leyes vigentes en el país (Barberena, Selva y Midence, 1861). Según Las Siete Partidas de Alfonso El Sabio, libro de leyes que aún se utilizaba para los casos penales, el condenado merecía un castigo corporal como condena, lo que a su vez añadía que no podía salir de la cárcel bajo fianza, no obstante, la Corte Suprema aprobó su excarcelación. La prensa de la época comentó que en la Honduras contemporánea no podían aplicarse a cabalidad las “penas consignadas en los códigos de España adoptados, por resistirlo el tiempo, los preceptos de nuestra Carta constitucional” (La Redacción 1861, p.4). Este caso demuestra que 40 años después de la independencia, las leyes españolas ya eran un arcaísmo para el sistema judicial hondureño y era urgente sustituirlas.

A finales de 1861 se desató en Honduras la Guerra de los Padres, entre el gobierno y la Iglesia Católica, y aunque no fue un conflicto bélico de grandes proporciones, condujo al asesinato del presidente José Santos Guardiola a inicios de 1862. Los distintos caudillos que ansiaban la silla presidencial se alzaron en este periodo hasta que en 1864 salió victorioso José María Medina, quien gobernaría el país hasta 1872.

La Cámara de Diputados de 1864 realizó el esfuerzo más serio hasta el momento para que se redactasen las leyes patrias hondureñas. El 23 de febrero emitió un decreto en el que explicaba que en Honduras se enfrentaba “la oposición, con la que se tropieza a cada paso, de las viejas leyes de Castilla, a letra y espíritu de una carta republicana como la nuestra” (Toro, Ferrari y Pineda, 1864, p.2), en otras palabras, que el marco jurídico ya no era compatible con la realidad nacional. El

artículo primero del decreto nombró una comisión compuesta por reconocidos profesores de derecho de la época –Inocente Bonilla, Valentín Durón, Pío Tranquilino Ariza y Martín Uclés– y les ordenó basarse en los códigos de El Salvador. Ese año y el siguiente, el orden interno se vio perturbado por la rebelión del departamento de Olancho que, si bien fue controlada por el presidente Medina, fue uno de los conflictos civiles más turbulentos de la historia del país y evitó que los comisionados lograran completar las labores de codificación.

En 1866, el jurista hondureño Carlos Madrid concluyó la redacción del Código Penal. Madrid basó el texto en el Código Penal de 1826 de El Salvador, que a su vez estaba inspirado del Código Penal de 1822 de España (Madrid, 1866). Según sus propias palabras, la labor de Madrid consistió en “armonizar el código con nuestra carta fundamental” (Madrid, 1866, p.10), es decir, se copiaron los artículos que no contradecían a la Constitución y se modificaron los demás. El presidente Medina decretó el Código Penal el 8 de marzo de 1866, para que entrara en vigor treinta días después. El texto fue mandado a imprimir en París, Francia, en la imprenta de Alfonso Bouret. No obstante, el Código Penal hondureño de 1866 no se aplicó y aunque no se han encontrado referencias inmediatas de la razón, la explicación puede recaer en la dinámica política de la época: el presidente podía mandar a redactar los códigos, pero el Congreso Nacional era el encargado de aprobarlos y emitirlos.

Para el 1868, ningún código había sido emitido. Ese año, el presidente de la Corte Suprema de Honduras se presentó ante el Poder Judicial y les explicó que era urgente aprobar el Código Penal y el de procedimientos “para que la administración de la justicia sea verdaderamente republicana. Sin ellos, congruentes, extensos, claros y precisos cuanto los requiere el Poder

encargado de aplicar la ley, la arbitrariedad vive en los tribunales” (Ferrari, 1868, p.3). El Congreso de ese año no aprobó los códigos. En 1870, el presidente Medina nombró una nueva comisión, compuesta por Crescencio Gómez y Valentín Durón, para que redactara los códigos civil, criminal, penal y de procedimientos; lo que demuestra que el Código Penal de 1866 había sido descartado (Medina, 1870a). Para esa fecha estaba completo el proyecto de un Código Militar y el Poder Ejecutivo nombró a los juristas Guillermo Bustillo, Manuel Colindres y Céleo Arias para revisarlo y corregirlo, pero no hay evidencia que este haya sido emitido (Medina, 1870b).

El ascenso de Ponciano Leiva a la presidencia después de las guerras libradas entre 1872 y 1874 dio un nuevo impulso al proyecto codificador. El 21 de mayo de 1874, el nuevo mandatario expidió un acuerdo que nombraba una comisión compuesta por los abogados Valentín Durón, Vicente Ariza y Crescencio Gómez para que redactasen los códigos: civil, penal y de procedimientos, se les puso como fecha límite el mes de diciembre de ese año y se les dotó de un salario mensual de 60 pesos (Leiva, 1874). Llegado el año de 1875 los códigos no habían sido concluidos y el Congreso Nacional decidió ordenar al Poder Ejecutivo que formara una recopilación de todas las leyes vigentes en la República (Zelaya, Ferrari y Madrid, 1875).

En 1876, el mandato de Ponciano Leiva llegó a su fin por presiones de los gobiernos de Guatemala y El Salvador. Esas dos naciones colocaron en la presidencia de Honduras a Marco Aurelio Soto, bajo quien se cumpliría la tan anhelada codificación de las leyes patrias.

El proyecto codificador del gobierno de Marco Aurelio Soto comenzó en abril de 1877, con la emisión de un acuerdo ejecutivo que ordenaba

a la Secretaría General del gobierno reunir los tratados jurídicos y códigos legales más reputados de la época para que fueran estudiados y sirvieran de base en la redacción. El gobierno explicó que el objetivo era “sustituir la incoherente, arbitraria y anti-económica legislación que hoy rige, con leyes acordes con las necesidades e intereses peculiares del país” (Rosa, 1877, p.1). En 1878, el Poder Ejecutivo ya tenía reunido los textos jurídicos requeridos y en febrero de ese año, emitió un nuevo acuerdo que comisionaba a los abogados Adolfo Zúñiga, Jerónimo Zelaya y Carlos Alberto Uclés para redactaran los códigos de Honduras (Rosa, 1878). En la comisión se especificó que las leyes se redactarían en el siguiente orden: primero, el Código Civil y sus procedimientos; segundo, el Código Penal y sus procedimientos; tercero, el Código de Minería; y finalmente, el Código de Comercio. No se estableció una fecha límite para que la comisión redactora terminara sus trabajos; se les asignó un salario de 60 pesos mensuales a cada uno de los jurisconsultos, el mismo salario que habían gozado los comisionados de 1874.

En 1879, la comisión codificadora ya había avanzado en sus trabajos. En su mensaje anual a la legislatura, el presidente Marco Aurelio Soto (1879) expuso un esbozo de los futuros códigos, que aún se encontraban en proceso de redacción. El mandatario afirmó que “la comisión ha tomado por modelo los códigos de Chile, menos en materia económica” (p.1) y justificó cada elección. Sobre el Código Civil explicó que se había hecho cambios en las materias que tocaban los intereses económicos de los ciudadanos, porque “el porvenir manifestamente económico de Honduras hizo adoptar a la comisión reformas capitales que difieren en gran manera de su admirable modelo” (p.1). Sobre el Código penal dijo que “está redactado en sentido liberal y humano: las penas mayores son diez años de presidio, y la muerte en los delitos atroces, como

el asesinato y el parricidio”. En cuanto al de comercio afirmó que “El Código de Comercio de Chile es, tal vez, la obra más perfecta de legislación chilena: por este motivo la comisión lo ha adoptado casi sin modificaciones sustanciales” (p.1). Por último, del Código de Minería dijo que “está redactado en sentido liberal, consultando a la más beneficiosa explotación de las minas” (p.1).

En 1880, los códigos ya estaban listos, pero estos no fueron publicados inmediatamente después de su aprobación, sino que Marco Aurelio Soto planificó un magno evento propagandístico. Para la promulgación, el presidente escogió el 27 de agosto, fecha en que se celebraba el aniversario de su inauguración como mandatario de Honduras; ordenó que las autoridades municipales hicieran una lectura pública de los códigos de ley y que enfatizaran que, desde ese día, “se deroga la legislación española que rige en el país” (Soto, 1880, p.1); luego, los códigos debían de ser depositados en la sala del cabildo municipal, en donde los ciudadanos tendrían hasta el 31 de diciembre para conocer las nuevas leyes, que, efectivamente, entrarían a regir el país el 1 de enero de 1881.

Una nota de prensa describió la promulgación de las leyes nacionales en Tegucigalpa de la siguiente manera:

A las once de la mañana en la plaza principal se hizo la promulgación de los códigos patrios. Este acto tuvo un carácter solemne e imponente. La municipalidad, en cuerpo, subió a un templete bellamente decorado, desde donde se dio lectura al decreto de promulgación, el que fue acogido con vítores de numeroso pueblo agolpado en la plaza que, durante el acto, permaneció coronada por los tres batallones de esta ciudad que estaban perfectamente uniformados. (La Redacción, 1880, p.1).

Honduras tenía al fin una legislación patria, republicana y había dejado atrás las leyes del Imperio Español del que se había independizado en 1821. Este no fue el fin de la historia, porque la Asamblea Constituyente de 1880 consideró que “al ponerse en práctica los Códigos de la República pueden surgir inconvenientes sobre su interpretación, descubrirse vacíos y contradicciones que conviene sean reparadas con oportunidad” (Gamero, Bográn y Zelaya, 1880, p.3) y facultó al Poder Ejecutivo para hiciera las reformas y adiciones que considerara necesarias; comenzó, entonces, la historia de la evolución jurídica de las leyes nacionales.

V. DISCUSIÓN

La tardanza en promulgar los códigos nacionales en Honduras no fue un mero descuido administrativo, sino el reflejo de un país en construcción, atravesado por guerras civiles, conflictos internacionales, crisis fiscales e inestabilidad política. Aunque la codificación fue un mandato constitucional desde 1825, la precariedad del aparato estatal y la corta duración de muchos gobiernos impidieron sostener un proyecto técnico de largo plazo. A ello se suma que, durante buena parte del siglo XIX, el país operó con una débil burocracia legal que sobrevivía apoyándose en la legislación heredada de la Colonia. Las prioridades de los gobiernos —entre ellas la pacificación, el control territorial y la defensa frente a potencias extranjeras como el Reino Unido— relegaron la codificación a un plano secundario. Incluso cuando hubo iniciativas serias, como las de 1830, 1864 o 1874, los contextos de guerra interna las frustraron. La promulgación de los códigos solo fue posible bajo un régimen relativamente estable, con financiamiento externo, como lo fue la Reforma Liberal en Honduras, respaldada por Guatemala y El Salvador, y liderada por Marco Aurelio Soto.

La elección del modelo chileno respondió a un criterio político y práctico. A diferencia de otros países latinoamericanos que adoptaron directamente códigos europeos, Honduras optó por una legislación americana que ya había sido traducida, ensayada y adaptada a las realidades de un país independiente con instituciones jóvenes. Chile, para entonces, tenía fama de estabilidad institucional y su Código Civil, redactado por Andrés Bello, era visto como un equilibrio entre el legado napoleónico y los principios liberales criollos. La comisión hondureña tomó ese modelo como base, pero no lo reprodujo sin modificaciones: adaptó especialmente los apartados económicos para reflejar las necesidades del país, como explicó el propio presidente Soto. Esto revela una voluntad de modernizar sin romper completamente con la tradición, seleccionando referentes regionales que conferirían legitimidad sin provocar el rechazo que había generado, años antes, la fallida imposición de los códigos de Livingston.

La entrada en vigor de los códigos marcó un hito simbólico y jurídico en la historia hondureña: representó el cierre de una etapa arcaica en términos normativos y el inicio de una legalidad republicana, aunque esta no siempre se aplicara de forma coherente en todo el territorio. Más allá de su contenido, los códigos de 1880 permitieron unificar los criterios legales y ofrecer una base común para la formación de jueces, abogados y funcionarios. También reforzaron el papel del Estado como emisor de normas, desplazando la autoridad de las antiguas leyes castellanas y de las costumbres locales. Sin embargo, la codificación no resolvió los problemas estructurales de la justicia hondureña: el centralismo, la falta de acceso real a la ley en zonas rurales, la politización de la justicia y la escasa profesionalización de muchos jueces siguieron siendo obstáculos. Aun así, la codificación fue el primer paso

necesario hacia un sistema jurídico moderno, y su promulgación con actos públicos en 1880 muestra cuánto valor simbólico tuvo ese momento para el Estado liberal en formación.

VI. CONCLUSIÓN

La historia de la codificación en Honduras entre 1825 y 1880 demuestra que la formación de un cuerpo normativo nacional no fue consecuencia automática de la independencia, sino el resultado de una larga y accidentada construcción estatal. A través del análisis de más de medio siglo de iniciativas frustradas, este estudio identifica tres hallazgos clave: primero, que el retraso en la promulgación de los códigos no respondió a una falta de voluntad legislativa, sino a condiciones estructurales de precariedad institucional, guerras civiles y dependencia regional; segundo, que la elección del modelo chileno reflejó una estrategia consciente de legitimación, que buscaba equilibrio entre tradición, modernización y compatibilidad regional; y tercero, que la promulgación de los códigos en 1880 no solo marcó un cambio jurídico, sino un acto performativo del Estado liberal, que utilizó la codificación como símbolo fundacional de autoridad y modernidad.

Este trabajo ofrece una interpretación del proceso codificador como expresión concreta de la estatalidad liberal, en el marco de un proyecto político regional impulsado desde Guatemala. La codificación fue parte de una agenda más amplia de institucionalización del poder, de disciplinamiento de la sociedad y de ruptura simbólica con el antiguo régimen. Asimismo, revela cómo las élites ilustradas del siglo XIX utilizaron el derecho como herramienta de legitimación republicana, alineándose con modelos jurídicos regionales en lugar de recurrir directamente a Europa o Estados Unidos.

En definitiva, el hito de 1880 debe leerse

como un momento fundacional del derecho nacional hondureño, pero también como un punto de inflexión en la construcción del Estado. La codificación implicó un cambio en la matriz de producción jurídica del país: de la herencia colonial a la producción legislativa autónoma. Este tránsito no resolvió los problemas estructurales de la justicia ni consolidó de inmediato una cultura legal uniforme, pero sentó las bases formales para la consolidación del Estado liberal. Comprender este proceso no solo permite resignificar una efeméride jurídica, sino también reinsertar a Honduras en los debates latinoamericanos sobre codificación, soberanía y modernidad jurídica.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Barberena, M., Selva, J. y Midence, M. (1861). “Sentencia proferida sobre el reo Casildo Ayestas por injurias vertidas sobre el ciudadano Pedro Medal”. *Gaceta de Honduras*, 4(35), p.4.
- Bravo, B. (1982). “La difusión del Código Civil de Bello en el derecho castellano y portugués”. *Revista Estudios Jurídicos*, 7(1), pp.71-106. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/126621>
- Cardona, J. (2023). De la independencia de Centroamérica a la primera Constitución del Estado de Honduras (1821-1825). Tegucigalpa: Editorial Sabio Valle de la Secretaría de Educación. <https://hal.science/hal-04220427>
- Ferrari, T. (1868). “Discurso dirigido al Soberano Congreso de la República”. *Boletín Legislativo*, 2(1), pp.3-4.

- Gamero, M., Bográn, L. y Zelaya, J. (1880). “Decreto en que se autoriza al Poder Ejecutivo para que reforme o adicione a los Códigos de la República”. La Gaceta, 10(93), p.3.
- Hernández, C. y Umaña, J. (2017). “El Código civil costarricense: un repaso a su historia y a sus principales retos”. Journal of Social Science and Humanities, 2(3), pp.73-100. <https://ijrdo.org/index.php/sshr/article/view/619>
- La Redacción. (1830). “Noticias”. La Gaceta, 1(5), p.7.
- La Redacción. (1861). “Sehadado publicidad al fallo anterior”. Gaceta de Honduras, 4(35), pp.4-5.
- La Redacción. (1880). “El 27 de agosto”. La Gaceta, 9(84), p.1.
- Leiva, P. (1875). “Acuerdo en que se nombra una comisión para redactar los códigos patrios”. El Nacional, 1(11), p.1.
- Madrid, C. (1866). Código Penal de Honduras. Imprenta de Alfonso Bouret.
- Martínez, N., Fernández, M. y Tijerino, R. (1860a). “Decreto legislativo que crea una comisión para analizar los códigos de El Salvador”. Gaceta de Honduras, 3(79), pp.1-2.
- Martínez, N., Fernández, M. y Tijerino, R. (1860b). “Decreto legislativo que aprueba la aplicación de las Ordenanzas de Bilbao en Honduras”. Gaceta de Honduras, 3(79), p.1.
- Matute, H., Fernández, M. y Cordon, M. (1859). “Decreto legislativo que ordena la redacción de los códigos patrios”. La Gaceta Oficial de Honduras, 3(45), p.1.
- Medina, J. (1870a). “Acuerdo en que se nombra una comisión para redactar los códigos”. Gaceta Oficial de Honduras, 14(5), p.12a.
- Medina, J. (1870b). “Acuerdo en que se nombra una comisión revisora del Código Militar”. Gaceta Oficial de Honduras, 14(5), p.122.
- Muñoz, J. (2003). “Del Derecho Colonia al Derecho Nacional El Caso de Guatemala”. En González, L. (coord.), XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: actas y estudios, pp.685-706. Puerto Rico: Academia Puertorriqueña de Historia.
- Rojas, L. (2008). Honduras: su historia constitucional. Banco Central de Honduras.
- Rosa, R. (1877). “Acuerdo en que se dispone la formación de los Códigos de la República”. Gaceta de Honduras, 2(17), p.1.
- Rosa, R. (1878). “Acuerdo en que se encarga la redacción de los códigos patrios”. Gaceta de Honduras, 3(29), p.3.
- Sáenz, J. (2015). Historia del Derecho hondureño: libro segundo. El Derecho nacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
- Silva, J. (1977). “El sesquicentenario del primero Código Penal Salvadoreño”. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1(1), pp.441-444. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1977-20044100444

- Soriano, C. (2013). “Circulación de modelos y centralidad de los códigos civiles en el derecho privado norteamericano”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1(136), pp.125-164. <https://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v46n136/v46n136a5.pdf>
- Soto, M. (1879). “Discurso dirigido al Soberano Congreso Nacional de Honduras”. Gaceta de Honduras, 5(44), pp.1-2.
- Soto, M. (1880). Decreto en que se previene la forma en que debe hacerse la promulgación de los Códigos Patrios. La Gaceta, 9(83), pp.1-2.
- Topolski, J. (1992). Metodología de la historia. Barcelona: Editorial Catedra.
- Toro, E., Ferrari, T. y Pineda, G. (1864). “Decreto nombrándolooslo una comisión de jurisconsultos para la redacción de los códigos de la República”. Gaceta Oficial, 5(17), p.2.
- Vallejo, A. (1882). Compendio de la historia política y social de Honduras. Tegucigalpa: Tipografía Nacional de Honduras.
- Zelaya, J., Ferrari, T. y Madrid, C. (1875). “Decreto legislativo que ordena la recopilación de las leyes patrias”. El Nacional, 2(9), p.2.